

Seis años de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas

Dolores Camacho Velázquez

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Asamblea nacional en Ostula

“Esta situación no puede continuar”

Reportaje de Gloria Muñoz Ramírez/Fotos de Heriberto Rodríguez

Historia y reto del CNI: Ramón Vera Herrera

Umbral: Las líneas de la dignidad



LaJornada

Ojaveasca

Suplemento mensual. Número 148. Agosto 2009

PREPARATIVOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CNI EN OSTULA. FOTOS: HERIBERTO RODRÍGUEZ

Mapeo militar estadounidense en México

Simón Sedillo

Se prepara golpe a las radios comunitarias

Voces de Perú después de la movilización de Bagua

Macario Matus (1943-2009), *Dios del sueño/Bidoó Bacáanda*

Las líneas de la dignidad

en memoria de Macario Matus,
el amigo alegre, el poeta permanente

Que los caminos de la lucha indígena estén minados sin cesar no ha impedido que ésta avance, crezca y aprenda. Los pueblos indios siguen confinados al México invisible, hoy que el México visible da vergüenza. Pero si la nación viera y aceptara a dichos invisibles recibiría unas bocanadas de realidad y aire fresco que buena falta le hacen.

La sociedad mayoritaria merece y necesita saber qué hacen, qué proponen, por qué luchan nuestros pueblos indígenas. Que les debe respeto y reconocimiento, que cualquier buen ciudadano debería estarles agradecido.

Ellos piensan, y actúan, en la defensa y protección de los recursos naturales, que es la del planeta en los tiempos que corren. Han trazado las líneas de la dignidad en cada paso que dan. Siendo víctimas constantes del sistema de justicia, de las decisiones económicas y la entrega de la nación al mejor postor, ocupan la posición más avanzada y conciente en la defensa de los territorios, los derechos humanos y la soberanía de nuestra nación.

Sus avances en la legitimación de las demandas y determinaciones que plantean los han vuelto el punto sensible, el desafío definitivo para la justicia con sentido ético, si acaso existe aquí. Y si concluyéramos que no existe, ¿no sería que gracias a los pueblos al ser escuchados, la sociedad nacional aceptaría por fin que en México la Justicia es un chiste y ha llegado la hora de que eso cambie?

Para los poderes, los pueblos originarios no pueden salirse con la suya. Por eso los persiguen tanto. Sus mensajes (su existencia misma si es posible) deben permanecer fuera del horario triple A, a menos que sirvan para engalanar la escenografía y los discursos del presidente y sus funcionarios, los gobernadores y algunos diputados.

En un país cedido a la violencia y la arbitrariedad, ellos resultan el blanco dondequiera que asomen la cabeza. Representan el principal obstáculo para diseminar hoteles, carreteras, negocios inmobiliarios, casinos y paseos veraniegos para el turismo mundial. Se pretende aniquilarlos en favor de la minería en su asalto final al subsuelo, de la comercialización y el envenenamiento de los ríos y las tierras. Estorban para expandir el negociado de los transgénicos (los acusados de “premodernos” o “fundamentalistas”: “ni que un elote criollo fuera para tanto, pudiendo multiplicarse los cultivos en millones, y además ‘protegidos contra la piratería’”, nos predicaban los non sanctos Monsanto que por el mundo van).

El país llamado México, de tan deteriorada y preocupante salud política y social, empezaría a curarse de verdad si escuchara a sus pueblos, y si los que mandan obedecieran. Pero los de arriba no quieren que el país esté sano. Corruptos, saqueadores, usurpadores, gesticuladores, ellos son la enfermedad, y esa enfermedad es su negocio.

La verdadera riqueza de México no son su oro, ni su petróleo, ni sus atractivos visuales, sino los pueblos indígenas que han puesto la dignidad en su voz y la escriben cada día. Merecen respeto, reconocimiento, el derecho a vivir en la paz y la prosperidad que ellos decidan.

El octubre próximo *Ojarasca* cumplirá 20 años. Ha sido un honor y sigue siendo nuestro compromiso acompañar a los pueblos a través de su palabra, sus artes, pensamientos y esforzadas luchas.

umbra

Se prepara golpe a las radios comunitarias

Durante los últimos meses hemos visto con preocupación como se ha intensificado el hostigamiento gubernamental en contra de las radios comunitarias e indígenas en diferentes estados del país. Los cuerpos represivos y en particular las corporaciones federales, actúan cada vez con mayor fuerza para dismantlar los medios de comunicación que operan en los pueblos indígenas, cancelando el derecho que tienen nuestros pueblos a la libre expresión y a contar con medios para difundir, rescatar y defender su cultura y patrimonio.

El marco legal vigente está diseñado para beneficiar a las grandes empresas de comunicación ligadas a los mismos funcionarios del gobierno y a los grupos políticos en el poder; el caso más claro es el de Televisa y el grupo salinista del Estado de México. Hasta ahora se ha frenado una reforma legal que democratice el acceso a los medios y no existen leyes que tomen en cuenta a las radios comunitarias ni el derecho de los pueblos indígenas a operar estos medios, pues los poderosos buscan con este vacío, evitar que nuestros pueblos y comunidades puedan ejercer sus derechos.

El constante hostigamiento que sufre el movimiento ciudadano y la criminalización de los luchadores sociales está alcanzando a las radios comunitarias e indígenas, las cuales vienen sufriendo un clima creciente de hostigamiento y de represión, con el cual el gobierno busca acallarlas. El caso de *Radio Tierra y Libertad* en Monterrey es preocupante pues se da a los comunicadores trato de delinquentes.

Esta política gubernamental busca beneficiar a los grandes monopolios y salvaguardar los intereses de los grandes empresarios, y para ello han establecido un acuerdo que incluye el dismantamiento de los medios de comunicación comunitarios, dando en particular un fuerte golpe a las radios indígenas en todo el país.

Las más de 200 radios indígenas y comunitarias que operan en México ejercen el derecho de darle voz a los que no la tienen para expresarse libremente, y cumplen un importante servicio social ya que promueven el rescate de valores culturales despreciados por los medios comerciales.

La política represiva contra nuestras radios comunitarias viola de manera abierta acuerdos y tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano, como el Convenio 169 de la OIT, el cual reconoce de manera explícita el derecho de los pueblos indios a contar y operar sus propios medios de comunicación.

La Red de Radios Comunitarias e Indígenas del Sureste de México denuncia la campaña represiva que orquesta el gobierno federal y hace un llamado a todas las radios indígenas y comunitarias a lo largo y ancho de territorio mexicano para sumar nuestros esfuerzos, luchar unidos y organizados en un frente de resistencia común para frenar los embates represivos que buscan acabar con nuestros medios.

Seguimos exigiendo castigo a los asesinos de las compañeras Teresa y Felicitas, comunicadoras triquis asesinadas el 7 de abril del 2008, y llamamos a la defensa de nuestros derechos como pueblos indígenas emprendiendo una campaña por nuestras radios y no permitir que ni una más sea dismantelada ni amenazada y ningún comunicador encarcelado.

Omar Esparza-MAIZ

Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano

La Jornada

Directora General: Carmen Lira Saade

Publicidad: Marco Hinojosa.

Ojarasca en La Jornada

Dirección: Hermann Bellinghausen

Coordinación editorial: Ramón Vera Herrera

Edición: Gloria Muñoz Ramírez y Eugenio Bermejillo

Fotografía y Diseño: Yuriria Pantoja Millán • Caligrafía: Carolina de la Peña •

Retoque fotográfico: Alejandro Pavón • Asesoría técnica: Francisco del Toro

Ojarasca en La Jornada es una publicación mensual editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, SA de CV. Av. Cuauhtémoc 1236, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, CP. 03310, México DF. Teléfono: 9183 0300 y 9183 0400. • El contenido de los textos firmados es responsabilidad de los autores, y los que no, de los editores. Se autoriza la reproducción parcial o total de los materiales incluidos en *Ojarasca*, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. ISSN: 0188-6592. Certificado de licitud de título: 6372, del 12 de agosto de 1992. Certificado de licitud de contenido: 5052. Reserva de título de la Dirección General del Derecho de Autor: 515-93. Registro provisional de Sepomex: 056-93. No se responde por materiales no solicitados. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV. Av. Cuauhtémoc 3353, Col. Ampliación Cosmopolita, México, DF.

La creación de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) en agosto de 2003 se propuso integrar a las comunidades zapatistas de un territorio en espacios comunes, en las regiones ya existentes desde los primeros años de su levantamiento.

A raíz de que no se cumplieron los Acuerdos de San Andrés en 1996, los zapatistas profundizaron formas propias de gobierno y desarrollo, hubo reparto de la tierra recuperada y se adoptaron las formas productivas según las virtudes de cada territorio. El café comercializado en el mercado alternativo internacional y el ganado a escala regional, la producción y la venta de artesanías y zapatos, son algunas de sus experiencias exitosas.

Al mismo tiempo, con el apoyo de organizaciones internacionales fortalecieron sus sistemas de salud y educación. Han construido una estructura civil, representada por las JBG. Los cargos son rotativos, lo que permite a la mayoría adquirir conocimientos sobre la responsabilidad de gobernar. Su principal objetivo es concientizarse de la naturaleza del mandar obedeciendo y de la necesidad del intercambio entre poblaciones de las diversas juntas, para afrontar la difícil situación que viven.

Hacia el exterior, atienden conflictos de tierra entre los zapatistas y organizaciones campesinas antes afines, o por el usufructo del transporte y el uso de los recursos naturales. Algunos casos se han resuelto mediante acuerdos, pero otros se hacen más complejos.

Durante el periodo 1997-2000, tanto las organizaciones como el gobierno respetaron los territorios zapatistas. A partir del 2000 surgieron casos como las agresiones de perredistas a los zapatistas en Zinacantán, y en Chilón, las de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic); aquí, las autoridades agrarias presionaron para introducir el Procede en tierras recuperadas por los zapatistas.

Durante el periodo de Vicente Fox cambian las formas de relacionarse con el gobierno. Es nombrado comisionado para el diálogo Luis H. Álvarez, y al principio los zapatistas lo reconocen, por su trayectoria en la Cocopa. Sin embargo, sus acciones posteriores lo convirtieron en un obstáculo para que el diálogo se efectúe, y además ha sido señalado como principal responsable de conflictos nuevos en territorios zapatistas.

Primero buscó la comunicación con las comunidades rebeldes, especialmente con los líderes visibles. Al no encontrar respuesta, inició una campaña de ataques públicos, afirmando que los comandantes habrían desertado y que el zapatismo estaría en decadencia, porque “se están resolviendo las causas del conflicto”. De manera unilateral decidió que éstas se debían a la falta de recursos, llegó a los lugares zapatistas, habló con los zapatistas, y les ofreció apoyos y proyectos de infraestructura y desarrollo que inevitablemente resultaron conflictivos.

Con dichos ofrecimientos propició el rompimiento de acuerdos para respetar la tierra recuperada, usufructuar el transporte de manera equitativa y alcanzar acuerdos en la construcción de carreteras. Los no zapatistas hicieron a un lado los acuerdos, para así disputar tierras que juntos recuperaron, y permitieron la aplicación del Procede para sacar a los zapatistas. Avalaron carreteras con la promesa de permisos otorgados por el gobierno del estado y apoyos para construir centros ecoturísticos. Todo, en el marco del Prodesis (Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona).

En poco tiempo la selva Lacandona quedó atravesada por carreteras y puentes que la cruzan de un extremo a otro. Los caudalosos y verdes ríos, las montañas y bosques han sido abiertos al paso del pavimento y a infinidad de coches que dan el servicio de transporte entre comunidades vecinas.



CARACOLES ZAPATISTAS: SEIS AÑOS DE NAVEGAR

Experiencias en la construcción de acuerdos

Dolores Camacho Velázquez

En ningún caso de acuerdo u oposición, los zapatistas han utilizado armas. Como expresa la JBG de Oventic: “Nosotros no peleamos aunque nos agredan, porque somos las bases de apoyo del EZLN, que no interviene si no hay guerra. Nos defendemos con la palabra y la razón, tratamos de demostrar a los otros que es error aceptar todo eso que ofrece el gobierno, que perjudica nuestros territorios, y que tenemos que aprender a vivir juntos y respetarnos”.

A pregunta expresa, miembros de la JBG de Morelia han dicho: “El zapatismo es pacífico, no queremos enfrentarnos con nuestros compañeros campesinos porque el verdadero enemigo son el gobierno y sus autoridades y no los pobres igual que nosotros. Buscamos que todos entiendan eso, que dejemos de vernos como enemigos, si somos iguales. Siempre hemos estado aquí y aquí estaremos compartiendo tierra, agua y todo lo que la naturaleza nos da. Si la destruimos, si contaminamos el río por tener drenaje en las casas, por abrir carreteras o traer turistas que ensucian el ambiente, vamos a perjudicarnos todos. Destruir la naturaleza es destruimos entre nosotros”.

Los conflictos han ocasionado desgaste en las comunidades, pero también han servido para crear relaciones más cercanas entre los zapatistas porque se mantienen mejor organizados en la defensa de las comunidades atacadas o en riesgo. Se han logrado acuerdos, algunos nada fáciles, entre los zapatistas y otras organizaciones o comunidades. La participación del gobierno no ha ayudado mucho a ese fin, porque sus resoluciones suelen postergar los conflictos.

Lo que está en juego, particularmente en la selva chiapaneca, son dos formas de concebir la vida y el futuro. La política del gobierno intenta individualizar

a los campesinos y minar su identidad colectiva con proyectos que benefician a grupos antes que a comunidades. Los “centros ecoturísticos” lo confirman.

Por su lado, los zapatistas, que tienen clara su posición, han evitado que se impongan formas diferentes de ver el futuro y se afecten los recursos naturales por la imposición de los proyectos en sus comunidades apoyados por Prodesis y respaldados en gran medida por Luis H. Álvarez, primero como comisionado para el diálogo y la reconciliación en Chiapas y ahora como comisionado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (proyectos avalados por organizaciones supuestamente protectoras del medio ambiente como Conservación Internacional). No obstante, si se siguen construyendo más centros turísticos, carreteras y drenajes en las comunidades, se pone en riesgo el futuro de la selva y de su gente.

La pregunta que se hacen los campesinos e indígenas ante tales evidencias es: ¿qué va a pasar con el campo y los campesinos si se acepta ese modelo de desarrollo? Saben que, de ceder, perderían su autonomía, para volverse dependientes de los “apoyos” del gobierno.

Por lo demás, existen bastantes experiencias exitosas, tanto de los pueblos zapatistas como de otras organizaciones y comunidades que se han opuesto a los proyectos “de sustentabilidad” que se imponen en la selva.

Dolores Camacho: investigadora del programa UNAM-Proimmse-IIa en Chiapas

Gloria Muñoz Ramírez, Xayacalan, Santa María Ostula, Michoacán. El territorio nahua recién recuperado fue el escenario donde más de 250 delegados pertenecientes a 13 pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas del país coincidieron en que “el capitalismo se comporta ahora con la mayor saña que se haya visto en la historia, en una empujada voracidad por nuestros recursos, agua, viento, vidas, tierras y territorios”. Ante esto, la Segunda Asamblea Nacional extraordinaria, del Congreso Nacional Indígena (CNI), advirtió que en estos momentos los pueblos indios se encuentran en una situación de emergencia.

El ambiente en el campamento en resistencia del nuevo poblado de Xayacalan, dentro de las asambleas y en conversaciones fuera de ellas, no sólo fue de descontento y denuncia sino de propuestas de acciones conjuntas, con la firme determinación de defender los territorios, ejercer la autonomía en los hechos y enarbolar un basta colectivo ante la violencia sistemática del Estado, traducida en despojos, desalojos, asesinatos, cárceles, desaparecidos, exiliados y represión —situación que, advirtieron en la declaración final, “no puede continuar”.

Hasta estas tierras del litoral del Pacífico michoacano llegaron representantes de los pueblos, tribus y naciones wixárika, yaqui, rarámuri, triqui, binnizá,

tenek, nahua, purhépecha, ñahñu, maza-hua, coca, amuzgo, tlapaneco, mixteco y cuicateco. Sus voces se mezclaron con cientos de participantes de las comunidades anfitrionas de Ostula, Pómaro y Coire, protagonistas de la recuperación de tierras del pasado 29 de junio, en una acción en que hicieron uso del derecho a la autodefensa, ante un ataque mercenario ordenado por un grupo de supuestos pequeños propietarios que habían invadido su territorio.

Fue precisamente la recuperación de estas más de mil hectáreas el motor de esta reunión. Para los anfitriones del significó el apoyo y solidaridad de Congreso Nacional Indígena (CNI) y en las cuatro mesas de trabajo fue el tema prevaleciente, como ejemplo de dignidad, organización, lucha y resistencia. Los retos no se vislumbran fáciles. En este paraje coexisten (o coexistían pues en estos momentos han hecho las siglas a un lado), militantes y simpatizantes de todos los partidos políticos. Hoy se declaran al margen de ellos, unen sus esfuerzos y trabajan en la construcción de un municipio autónomo. Y no de un “municipio soberano”, pues, como diría don Juan Chávez, representante purhépecha, “esa es una fórmula capitalista que no tiene cabida en la autonomía”.

El referente más importante de la reapropiación de este territorio fue sin duda la activación de la policía comunitaria y



CNI EN OSTULA, MICHOACÁN:

“Esta situación no puede continuar”

guardia tradicional, cuyos representantes hicieron acto de presencia ante la asamblea en medio de los aplausos y ovaciones de los delegados y observadores agrupados bajo la enramada recién construida. Con el rostro cubierto con telas negras improvisadas, miembros de la guardia tradicional se posionaron en los costados de la reunión. “Ellos resguardarán nuestro encuentro. Nos cuidarán todo el tiempo”, señaló el moderador Teódulo desde el micrófono.

La autodefensa de los pueblos indígenas, afirmaron en la declaración final de Xayacalan, “es un modo de organización y acción que estamos buscando y ejerciendo como un paso necesario para defender y proteger nuestra autonomía, nuestra vida, nuestros pueblos, naciones, comunidades, tribus y barrios”.

Y ante voces aisladas que pidieron el reconocimiento institucional de las policías comunitarias indígenas, la asamblea aclaró que “la autodefensa no está sujeta a ningún tipo de negociación inter o paragubernamental, ya que es un recurso para lograr el buen vivir en equilibrio en nuestras comunidades, ante el resquebrajamiento y corrupción del entorno y de las instancias irresponsables de la seguridad estatal, nacional e internacional”.

La autodefensa, advirtieron “es un buen gobierno por nosotros mismos nombrado, reconocido y respetado, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación como pueblos que somos”.

Para esta segunda Asamblea Nacional Extraordinaria, el CNI se organizó en cuatro mesas de trabajo, y en todas ellas se discutieron tres temas centrales: el balance de la lucha indígena a partir del Cuarto Congreso Nacional Indígena realizado en la comunidad ñahñu de Atlapulco en el mes de mayo de 2006; el diagnóstico y evaluación de la guerra de conquista y devastación neoliberal en contra de los pueblos indígenas, de la nación y de la Madre Tierra; y el ejercicio de la autonomía indígena, la protección de los territorios indígenas y el derecho a la autodefensa.

El camino. Carlos Manzo, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, recordó que la primera sesión del CNI se realizó en San Gregorio Atlapulco en octubre de 1996, convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con una vasta presencia de los pueblos indígenas de todo el país. El segundo Congreso Nacional se realizó en el zócalo de la ciudad de México en 1998, y el tercero en la comunidad purhépecha de Nurío, en el contexto de la marcha del Color de Tierra, encabezada por el EZLN y acompañada por los pueblos indígenas del país. Durante todo este tiempo, recordó Manzo, “la voz de los pueblos indígenas fue traicionada por el Estado mexicano y aprobaron una ley indígena que no reconoció los principales postulados de los Acuerdos de San Andrés”. En este contexto, en el cuarto CNI se ratificaron los

Acuerdos de San Andrés como ley en las comunidades para fortalecer la construcción de autonomías en los hechos.

A partir del cuarto Congreso, continuó Alberto Guerra, de San Gregorio Atlapulco, “se crea una conciencia: si no participamos en la defensa de nuestros recursos, nos van a despojar y saquear de nuestras tierras, como han hecho desde hace años”. Es precisamente en este encuentro nacional donde el CNI en pleno ratifica su adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, promovida por los zapatistas como respuesta a la traición de la clase política mexicana al movimiento indígena nacional.

Es notable, señaló Rocío Moreno, del pueblo coca de Mezcala, que con la incorporación del CNI a la Sexta y su incorporación al recorrido de La Otra Campaña, este espacio de vinculación creció geográficamente, principalmente en el Norte del país, donde se llevó a cabo el Encuentro Continental de pueblos originarios de América, en Vímam, Sonora. A partir de ese momento, refirió Moreno, “se plantearon nuevos problemas y soluciones, y se añadieron fuerzas y resistencias”.

Federico Ortiz, observador de Uruapan, Michoacán, y acompañante del CNI desde sus inicios, coincidió en que ocurre un crecimiento del CNI en el Norte, donde, recordó, se organizó en solidaridad con los cucapá un campamento en defensa de la pesca prohibida por la Profepa. La autonomía y la defensa del

territorio, indicó, se han fortalecido en los últimos años y como ejemplos citó la recuperación de tierras del pueblo nahua y la paralización del proyecto carretero que pasaría por lugares sagrados de los wixárika de Santa Catarina.

Eutimio Díaz, wixaritari de Jalisco, refrendó que “antes el gobierno llegaba a las comunidades con programas, pero a estas alturas ya nos hemos organizado y ya no nos convencen. A veces cuando le llegan al comisariado pues se vende, pero ya no ha estado pasando esto. Ahora lo que pasa con nosotros es que los comuneros firman cosas que no deben y ya nos hemos dado cuenta”. Eutimio relató que el comisariado que “se vendió” iba a recibir dinero “para la comunidad” pero “la asamblea no lo dejó”, pues ya no aceptan esos programas del gobierno.

El diagnóstico y la autonomía. En la asamblea extraordinaria del CNI se vertieron un sinnúmero de dolores de los pueblos indígenas. Y como respuesta y propuesta se habló de formas y acciones para parar los proyectos mineros y las presas que devastan el ambiente y desaparecen pueblos enteros. Se refirieron también a la impostergable defensa del maíz y de todas las semillas naturales: al peligro que representan la iglesia y las sectas religiosas que se están implantando en territorios indígenas, al rechazo a los proyectos turísticos y carreteros, así como a la defensa del agua y el rechazo a su privatización. Se habló, y mucho, de la injerencia nociva que representan los partidos políticos de todos los colores que llegan a destruir la organización comunal y de la represión a la que han sido sometidos los pueblos que resisten.

Gaudencio Mancilla, nahua del Consejo de Mayores de Ayotlán, advirtió que “una y otra vez los caciques y empresarios son los agentes de discordia en nuestra comunidad, como es el caso de la Mina Peña Colorada, donde explotan nuestras tierras y no pagan y no contribuyen en nada al desarrollo de la comunidad”.

Por su parte, Antonio Altamirano, de la colonia Yerbabuena, Colima, indicó que “haciéndose valer de la actividad del volcán nos están reubicando poco a poco... aunque somos pocos los que nos mantenemos en resistencia permaneciendo allí mismo, nos están cortando los servicios públicos como luz y agua”.

De Tuxpan, Jalisco, el nahua Eduardo Patricio Martínez, explicó que en esta comunidad se implementan cultivos orgánicos “que dan la misma producción que en los sembradíos que utilizan agroquímicos”.

Sobre la defensa del maíz, Silvia Ribeiro, en su calidad de observadora e integrante del grupo ETC, advirtió que se pretende que las comunidades “pierdan sus semillas naturales y se vean en la necesidad de comprarlas, además de que ellos están contaminando las semillas de las comunidades para después rastrearlas y quitarlas argumentando su contaminación”. Ribeiro insistió en la importancia de que el CNI se declare en contra del maíz transgénico, se proteja a las semillas propias y denuncie que se las están contaminando.



El representante purhépecha de Nurío, Juan Chávez, denunció en este sentido que la Ley de Protección de Semillas es “para obligar a nuestros pueblos a que se patenten las semillas, y detrás de esto está Monsanto y tres corporaciones más que controlan las semillas del mundo, entre ellas las semillas mejoradas, semillas Terminator y transgénicos, y vamos a tener que comprar esos maíces dependiendo de las empresas. Éstas son nocivas para el consumo humano. En Europa se utilizan para forraje y aquí las quieren vender como alimento. El gobierno con sus programas apoya a las semillas industrializadas, pero no hay apoyo al campo para cuando cultivamos nuestras semillas. Si no registramos nuestras semillas tendríamos semillas piratas y nos cobrarían por usar estas semillas”.

Por otra parte, Vicente Paredes Perales, de Mezcala, Jalisco, explicó que en esta comunidad hay un proyecto turístico que tendrá como consecuencia que los indígenas se conviertan “en esclavos de nuestras propias tierras”. Neftalí Domínguez, de Zitácuaro, mencionó que sus tierras fueron “explotadas para hacer un corredor industrial y nuestros bosques han sido talados por gente capitalista”.

Sin embargo, dijo, “ahora nosotros vigilamos nuestros bosques con nuestros propios recursos”. Explicó también su lucha contra la empresa Santorini, que extrae el agua de sus manantiales.

Desde Vímam, Sonora, llegó Juan Domingo por segunda ocasión a Ostula. Aquí se refirió a la intrusión de las sectas religiosas en las comunidades indígenas. Señaló que todas las sectas promueven lo que “es bueno para ellas” pero “no para nuestra cultura, que es la base de la autonomía”. Las sectas, explicó, no permiten a los yaquis “participar en los usos y costumbres de nuestro pueblo y se atreven a opinar en contra de nuestras costumbres. Cada vez más gente nuestra es convencida y algo hay que hacer en lo particular, pues es importante atenderlo con urgencia para detener esa constante intrusión que afecta la fortaleza de nuestra cultura y nuestras costumbres”.

Gabino Ávila, de la Mixteca oaxaqueña, puso a discusión un aspecto relevante de los procesos autonómicos: “Hay comunidades que hablan de autonomía y siguen recibiendo los apoyos del gobierno. Siempre he dicho que los apoyos no llenan las necesidades, pues se les da el sobrante a las comunidades y son proyectos que no se nos consultan, sino que nos los imponen en la Mixteca de Oaxaca. El Congreso Nacional Indígena se pronunció por la libertad inmediata e incondicional de los doce presos políticos de San Salvador Atenco, los cinco presos de Candelaria, Campeche demandados por la Comisión Federal de Electricidad, y la de “todos y todas los presos políticos indígenas y no indígenas del país”.



Bidóo Bacáanda Dios del sueño

Gúuzi Góope síca Moctezuma guníi xcáanda cáadxi binni quíichi néé ruáa ráaxhi zéeda yéete cáa lúu nñisa dóo tii quíñe ntáa laa. Néé huandíi, lúu cáa baláaga quéé, déeche cáa máani quéé béeda ndáa cáa binni guníi xcáanda xañique quéé. Núu ndáani layúu stíi xañique quéé zaa quéé bñini núu xipiáani riníi xcáanda cáa. Rúuya cáa síca ráaca ridxíi nñi chíi guizáaca lúu. Cáa bacáanda quéé, guníi zéeda quéé, náaca cáa nñi huandíi néexhe náa. Nguéé rúuni quíi nucáa lúu cáa bée, bidíi cáa bée guíiba gúuchi, layúu, néé lúuna rizáaca. Cáa bacáanda ngáa díidxa huandíi. Tíi gúuca huandíi guennnda ruziguníi stíi cáa binni quíichi. Yanna láaga xhuxháale lúu núu riníi xcáanda núu huandíi ngáa huandíi.

Gúuzi Góope, como Moctezuma, soñó que unos hombres blancos y barbados bajarían de los mares para destronarlo. Y sí, sobre unas barcasas, sobre unos caballos, llegaron aquellos hombres que había soñado el rey. Había en el reino zapoteca los sabios que soñaban. Veían como si fuera de día lo que pronto sucedería. Los sueños, predijeron, son realidades despiertas. Por eso se entregaron, dieron el oro, su tierra, reino. Los sueños son verdad. Fue verdad la mentira de los blancos. Ahora que estamos despiertos, soñamos que la verdad es verdad.

Macario Matus

Poeta y periodista zapoteco, colaborador y amigo entrañable del equipo de *Ojarasca*, nacido en Juchitán, Oaxaca, Macario Matus falleció el 6 de agosto pasado. En 1998 publicó el que es uno de sus libros: *Binni zaa* (*Los zapotecas*), donde pasa revista a los dioses Zaa “que por razones del destino han permanecido incólumes en la memoria colectiva de los zapotecas de hoy, de siempre”. Sirva este poema, que *Ojarasca* publicó en junio de 2001, en su número 50, para recordar a este poeta del Istmo.



Historia y reto del CNI

En 1996, el Foro Nacional Indígena y luego el Congreso Nacional Indígena (CNI) nacieron zapatistas porque el EZLN promovió su formación. Pocos imaginaban lo dúctil y por lo mismo fuerte y transformador que iba a resultar ese espacio que a casi 13 años, zapatista sigue.

Las críticas comenzaron de inmediato y con ellas ha vivido: la principal es que se ha resistido a ser una organización formal con cuadros, niveles de representación, líderes y voceros, la estructura piramidal que se dice sinónimo de organización, eficacia y rapidez para actuar.

Desde el primer momento su negativa a ser una organización vertical salvó al CNI de caer en manos de la voracidad de organizaciones clientelares que ambicionaban la representación nacional de todos los indígenas del país, estuvieran o no de acuerdo. Pero el CNI era autogestionario y muy al modo de las comunidades indígenas. Reunión tras reunión, el CNI ratificó ser “asamblea cuando estamos juntos y red cuando estamos separados”.

Claro que esto dificultó (sobre todo cuando no había acceso internet) dar respuesta puntual o pronta a muchas de las coyunturas difíciles que los poderes fácticos de todo tipo imponen en las diferentes regiones de México, pero permitió ir tejiendo relaciones reales (no sólo rituales), horizontales, profundas y de larguísimo plazo entre los muchos pueblos, naciones, tribus, comunidades y barrios, que se reconocieron y se reconocen en una hermandad muy difícil de hallar.

Con ella como talismán han creado un camino propio y espacios de diálogo libres (al modo de las asambleas de las comunidades) donde, en estos casi trece años, se reflexiona con mucho detalle sobre la historia propia y sobre las tremendas condiciones que golpean las regiones. Así, el CNI ha logrado un diagnóstico compartido del ataque del capitalismo desde lo local a lo regional, nacional y mundial con impresionante conciencia de quiénes, cómo, cuándo y dónde invaden, depredan, roban, corrompen, ejercen controles, presionan, reprimen e intentan estafar a la gente en sus localidades. Crea de continuo, también, métodos, prácticas, posturas, para una autonomía en los hechos, con todo en contra.

Junto con el EZLN, el CNI ha encarnado varios de los más trascendentes episodios de la historia reciente

de México. Primero, la concepción conjunta (entre representantes indígenas, intelectuales, activistas y funcionarios) de los Acuerdos de San Andrés. Tales acuerdos siguen teniendo la enorme pertinencia política de ser un instrumento concreto que, de cumplirse, acotaría las acciones del gobierno con mecanismos para que quien gobierne obedezca al pueblo. Por eso no hay la voluntad gubernamental de cumplirlos. La lucha por reivindicar la reforma constitucional que podría haber puesto en operación los Acuerdos constituyó también un momento memorable por ser quizá la enmienda jurídica más consensada en la historia de México y lograr las movilizaciones más amplias en número y variedad de participantes que, al grito de “Nunca más un México sin nosotros”, recorrieron el país en consultas, marchas y caravanas durante cinco años.

Tras constatar que los tres poderes de la Unión les dieron la espalda, el CNI y los zapatistas generaron algo muy profundo: autonomía y autogobierno en los hechos, reivindicación de la dignidad, la historia y los saberes propios, la comunidad, el mandar obedeciendo y una visión de conjunto muy filosa. Esta autonomía se concreta en consejos municipales autónomos en la zona zapatista, asambleas como autoridad en diversas zonas indígenas del país, radios libres, policías comunitarias, la defensa integral del territorio, la red en defensa del maíz nativo, circuitos fluidos de migrantes y sus comunidades, concejos regionales de cabildos, alianzas para defender agua y bosque o para enfrentar megaproyectos, basura, minería, carreteras, proyectos turísticos, invasiones ganaderas y de narcotraficantes.

La nueva asamblea nacional del CNI responde a las condiciones extremas y generalizadas de represión en el país, a la violencia de la guerra entre cárteles del narcotráfico auspiciada por el Ejecutivo federal para privilegiar a unos sobre otros. Por su naturaleza, el CNI seguirá promoviendo condiciones que permitan que las comunidades defiendan, en los hechos, el trabajo común, los sueños de justicia y libre determinación.

En su vasta diversidad, el CNI tiene muy clara la fuerza que siguen tejiendo los pueblos, naciones, tribus y barrios: la alianza inquebrantable de la gente.

Ramón Vera Herrera

Mapeo militar estadounidense en México

Simón Sedillo/Left Turn Magazine

Los hechos son claros: comunidades indígenas en México son acosadas por el ejército estadounidense con la ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas. En 2005, el departamento de Geografía de la Universidad de Kansas recibió 500 mil dólares del departamento de Defensa para mapear tierras comunales indígenas en San Luis Potosí y Oaxaca. Con la ayuda de la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero (FMSO, por sus siglas en inglés), localizada en la

famoso por enseñar al personal militar latinoamericano tortura y creación de escuadrones de muerte paramilitares): fue agregado militar estadounidense en Guatemala entre 1988 y 1991, tiempo de represión militar contra las comunidades indígenas guatemaltecas, con varios casos notorios de tortura y asesinato.

Antes de México Indígena, Demarest implementaba estrategias de información geográfica en Colombia, por lo menos hasta 2003. Un ensayo de

gro de estos proyectos de mapeo: “México Indígena se suscribe a una estrategia político-militar. El mapeo empieza en medio del debate sobre un paquete de financiamiento militar de Estados Unidos que es la Iniciativa Mérida. El control y desplazamiento de comunidades indígenas pretende remover potenciales *focos rojos* en la política, contribuir al control militar de la región y finalmente ‘liberar’ recursos naturales para beneficio del gobierno y, a su vez, sus aliados trasnacionales”.

La noción de Demarest de que la mayor resistencia al orden mundial neoliberal en México viene de comunidades indígenas que demandan autodeterminación en su territorio comunal no es, por supuesto, una sospecha. Así es.

En 1992, después de que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari derogara el artículo 27 de la Constitución que otorga legitimidad comunal de la tierra a los campesinos indígenas de México y en 1994, tras la aprobación del TLCAN, una serie de levantamientos de liderazgo e inspiración indígena se moviliza por la autodeterminación y la autodefensa de su territorio.

Una de las luchas más notorias es la de los zapatistas, quienes ganaron atención global capturando un tercio de Chiapas en las primeras horas del primero de enero de 1994, día en que el TLCAN entró en vigor. Denominaron su levantamiento armado indígena “lucha contra la muerte y el olvido, lucha por la paz con dignidad, justicia y libertad”. Aunque los fusiles zapatistas se han mantenido en silencio durante los últimos 15 años, ellos continúan resistiendo e inspiran y escuchan a las muchas luchas de México y el mundo.

En junio de 2006, una de esas luchas, una huelga sindical de maestros en la ciudad de Oaxaca, explotó rápidamente convirtiéndose en un levantamiento popular con una base indígena muy fuerte. El éxito del consiguiente levantamiento de 6 meses fue alimentado por ideas sobre las formas tradicionales de la tenencia de la tierra y las estrategias subsecuentes para el autogobierno que la vida comunal indígena implica. Campesinos indígenas, maestros, estudiantes, amas de casa y trabajadores se unieron contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, exigiendo su renuncia.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que tomó la ciudad capital del estado por seis meses utilizando una serie de bloqueos, y que se autoproclamó cuerpo de gobierno de facto, nació de una fuerte base indígena. La primera asamblea general de la APPO, en la que participaron 270 delegados, fue organizada bajo el principio indígena mesoamericano de “mandar obedeciendo”. La asamblea general utiliza una forma indígena de organización por consenso que existe en Oaxaca por miles de años.

La batalla por Oaxaca no es pequeña. El estado es estratégico para los intereses neoliberales y es muy rico en recursos naturales. Ahí ya se emplaza una serie de proyectos industriales del TLCAN y el Plan Puebla Panamá. Carreteras, vías férreas, puertos comerciales, corredores de energía eólica, minas, empresas agropecuarias y maquiladoras son algunos ejemplos del “progreso” que tratan de vender. Pero en los últimos 15 años, estos símbolos de progreso sólo han desplazado sistemáticamente a comunidades indígenas, a las que no consideran “económicamente viables”. La vida humana en Oaxaca es otra variable a desechar en la ecuación de ganancias del TLCAN. Desplazar a los indígenas de sus tierras y robarles sus medios de subsistencia es equivalente al genocidio.

Al mismo tiempo que la APPO se enfrentaba al gobierno en las calles de la capital, el proyecto México Indígena movió sus operaciones en silencio, de San Luis Potosí a la Sierra Juárez, en Oaxaca, una región biológicamente diversa y rica en minerales.

Los indígenas siempre han estado más dispuestos a morir luchando por sus tierras, todos los gobiernos han estado dispuestos a matarlos y arrebatarlos. Negar y criminalizar las formas tradicionales de tenencia de la tierra es negar la vida y cultura de los indígenas. Demarest, la FMSO y el ejército de Estados Unidos lo saben. Pero lo que han descubierto en sus estudios de territorio indígena y resistencia en México y otras regiones de América Latina, es que el arma más peligrosa para el neoliberalismo no es necesariamente la lucha por el poder del Estado, o la presencia de la fuerza física. Es la implacable creencia de que el autogobierno y la autodeterminación, la forma tradicional de poder horizontal cosechada por comunidades indígenas de México, es una gran amenaza al orden mundial.

Simón Sedillo es un organizador chicano que lucha por de defensa de los derechos comunitarios. Realiza películas documentales y su trabajo se ha centrado en poner habilidades, cámaras, y equipo de edición en las manos de comunidades en resistencia para que puedan documentar sus propias historias de lucha.

Ver <http://elenemigocom.un.net/2625/> x/es

Después de Bagua

Alfredo Rodríguez, asesor de Aidesep (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana). Los 120 decretos impuestos por el presidente Alan García sin la aprobación del Congreso fueron cocinados en los bufetes legales de las transnacionales interesadas en la explotación salvaje de la Amazonía. El pretexto para imponerlos es que se necesitaban para armonizar la legislación nacional con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado en 2007. La mayoría de los decretos no tenía nada que ver con el tratado. El movimiento de los indígenas amazónicos ha protestado contra once de los decretos que los golpeaban a muerte y, hasta ahora, obtuvo la anulación de cuatro. La excesiva reacción del gobierno, que llegó a la matanza de Bagua, ha puesto en evidencia que tras los decretos hay un meganegocio con las transnacionales y que probablemente muchas comisiones ya fueron pagadas.

Además de las actividades extractivas, hay dos nuevos *business* en programa para la Amazonía. Uno son los monocultivos extensivos para producir biocombustible. El otro es la compra de millones de hectáreas de selva para su reventa a los países industrializados como tiraderos de CO₂, según el programa Reducción de Emisiones de Carbono por la Deforestación y la Degradación de los Bosques de la ONU.

Los hechos de Bagua atrajeron la atención, pero ya antes hubo episodios de lucha y resistencia que pusieron en crisis al Estado: en Camisea, en la Estación 5 de Petroperú, en el río Napo, en el Corrientes, con su capacidad de bloquear el tráfico fluvial y carretero y los mismos oleoductos, el movimiento indígena de la Amazonía ha demostrado poder tocar las venas más sensibles de la economía nacional, el flujo de gas y petróleo. En mayo bloquearon el río Urubamba, a la altura de Atalaya. Siete mil asháninkas bajaron del Gran Pajonal —nunca se había visto tal cantidad de indios de la selva en la ciudad de Atalaya. Una cosa inédita, los pobladores urbanos no sólo se solidarizaban con ellos, sino que los hospedaban y alimentaban. Sin embargo no fue noticia.

Las compañías gasíferas y petroleras que ya operan en la selva contaminan los ríos y matan a los

peces, que siempre han sido un recurso alimenticio importante para las comunidades. Los comuneros sienten que su sociedad es destruida por los fue-reños, que las únicas cosas que dejan son enfermedades, contaminación, destrucción del ambiente y de un modo de vida milenario. Para ellos es una cuestión de vida o muerte.

Aidesep siempre se ha mantenido distante de los partidos políticos. Sus dirigentes siempre se han centrado más en lo indígena que en lo político. El dirigente indígena, Alberto Pizango, rompió con esta tradición, acercándose a la Confederación General de Trabajadores del Perú, y a la izquierda, para formar un frente en defensa de la Amazonía. Fue él quien abrió una relación entre el movimiento indígena y las fuerzas políticas, que no existía antes. El primero de mayo, Pizango aceptó la invitación de los comunistas para participar en la gran manifestación de la Plaza Dos de Mayo. Era la primera vez que un líder selvático tomaba la palabra en un mitin de la clase obrera y lo hizo para pedir solidaridad de todos los trabajadores con la lucha de los indígenas en defensa de la Amazonía. Fue ahí que la lucha para la Amazonía se convirtió en lucha nacional.

Leandro Calvo, vicepresidente de la ORPIAN (Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía del Norte) adherente a Aidesep. Nadie se esperaba que el 5 de junio, día mundial del ambiente, el gobierno lanzara un ataque armado contra nuestros hermanos. Era el día 57 del paro amazónico, una lucha totalmente pacífica y democrática contra los decretos inconstitucionales que ignoran nuestros derechos. Según el Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas tienen que ser consultados para todo proyecto que los afecte y que involucre sus territorios ancestrales.

En el Perú, que firmó, este tratado tiene rango constitucional y no se pueden emitir leyes que lo violen, como los decretos de Alan García.

Lo que le interesa al gobierno son las grandes inversiones extranjeras. Nosotros también estamos a favor del desarrollo, pero por un desarrollo colectivo, que deje algo a la población, a las generaciones futuras. Los funcionarios del gobierno nunca han venido a nuestras comunidades a ver las carencias. En vez de pensar sólo en extraer oro, madera, petróleo, ¿por qué no nos apoyan en salud y educación? En la frontera norte sólo tenemos dos maestros para 150 alumnos, un solo médico para curar a cuatro mil personas y sin suficientes medicamentos. Ahora que hay tanta preocupación por el cambio climático, se debería entender que nosotros defendemos la Amazonía no sólo para nuestra gente, sino para toda la humanidad, para el planeta.

Daysi Zapata, presidenta de Aidesep. El presidente Alan García menciona que Brasil ha puesto en concesión, de un solo golpe, 67 millones de hectáreas y que en Perú, según su lógica del perro del hortelano, esto no se podría hacer porque provocaría demasiadas protestas. Lo que Alan García se olvidó de decir es que aquella superficie de tierra representa sólo el diez por ciento del territorio amazónico brasileño y que, gracias a estos números, el gigante continental tiene un mayor margen de maniobra en su política ambiental. Pero Perú no puede darse este lujo, no puede bajar la guardia, y menos aún tomar el camino del suicidio ecológico.

Santiago Alfaro Rotondo, sociólogo. La Amazonía peruana es una región que siempre ha sido poco controlada, sea por el Estado colonial o republicano, y esto contribuyó a la resistencia de las identidades étnicas, mucho más que entre los indígenas andinos, que actualmente se identifican como campesinos. Los indios amazónicos todavía se sienten *shipibo*, *asháninka*, *awajún*, *wampis*, *shawi*, además de peruanos. Es desde final de los años 60, que se formó un movimiento indígena que reivindica derechos colectivos, como la conservación de sus lenguas y territorios ancestrales, y que ahora se ha vuelto visible a nivel internacional con los hechos de Bagua. La visión del movimiento indoamazónico es hacer coincidir el desarrollo con el respeto de su identidad y autonomía y con la conservación de sus territorios y los recursos renovables.

Entrevistas: Gianni Proietti

Corresponsal en Latinoamérica del periódico italiano *Il Manifesto*.



OSTULA, MICHOACÁN. FOTOS: HERIBERTO RODRÍGUEZ